

- **Proposta de resolució sobre la senyalització d'alt ús per ciclistes de la carretera BV-2041 entre Begues i Gavà**  
Tram. 250-01416/10

Pròrroga del termini de presentació d'esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 103811).  
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.02.2015 al 17.02.2015).  
Finiment del termini: 18.02.2015; 09:30 h.

- 3.10.45. PROCEDIMENTS RELATIUS A UN PLA O UN COMUNICAT DEL GOVERN

- **Projecte del Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018**  
Tram. 259-00003/10

Pròrroga del termini de presentació d'esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 104251; 104706).  
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.  
Finiment del termini: 10.02.2015; 09:30 h.

- 3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LACIONS

- **Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el compliment de la legalitat en el procés de preinscripció escolar**  
Tram. 302-00247/10

Presentació

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya  
Reg. 104324 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.02.2015

#### A LA MESA DEL PARLAMENTO

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José García Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo que establece el artículo 139 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al Govern sobre el compliment de la legalitat en el procés de preinscripció escolar (tram. 300-00267/10).

#### MOCIÓN

Los derechos lingüísticos en el ámbito educativo de los alumnos catalanes están siendo reiteradamente vulnerados por el gobierno de la Generalitat.

Las leyes que recogen y garantizan estos derechos, así como las decisiones judiciales son claras a este respecto:

*A. La Ley 1/1998, de 7 de enero, de Política Lingüística, artículo 21.2 establece:*

«Los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano. La Administración ha de garantizar este derecho y poner los medios necesarios para hacerlo efectivo. Los padres o tutores lo pueden ejercer en nombre de sus hijos instando a que se aplique.»

*B. La Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, en su artículo 35 dice:*

«1. Todas las personas tienen derecho a recibir la enseñanza en catalán, de acuerdo con lo establecido por el presente Estatuto. El catalán debe utilizarse normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza universitaria y en la no universitaria.»

*C. La Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, del 28 de junio, expresa que el artículo 35 del Estatut de Autonomía será constitucional si es interpretado y aplicado en los términos fijados en el Fundamento Jurídico 24 de dicha sentencia:*

«Es doctrina de este Tribunal que «no puede ponerse en duda la legitimidad constitucional de una enseñanza en la que el vehículo de comunicación sea la lengua propia de la Comunidad Autónoma y lengua cooficial en su territorio, junto al castellano (STC 137/1986, fundamento jurídico 1), dado que esta consecuencia se deriva del art. 3 C.E. y de lo dispuesto en el respectivo Estatuto de Autonomía» (STC 337/1994, de 23 de diciembre, FJ 9). En este sentido, nada impide que el Estatuto reconozca el derecho a recibir la enseñanza en catalán y que ésta sea lengua vehicular y de aprendizaje en todos los niveles de enseñanza. Pero nada permite, sin embargo, que el castellano no sea objeto de idéntico derecho ni disfrute, con la catalana, de la condición de lengua vehicular en la enseñanza.

Hemos descartado desde un principio toda pretensión de exclusividad de una de las lenguas oficiales en materia de enseñanza. En particular, afirmamos en la referida STC 337/1994, FJ 9, que «el contenido del deber constitucional de conocimiento del castellano [...] no puede generar un pretendido derecho a recibir las enseñanzas única y exclusivamente en castellano», pues «de la cooficialidad de la lengua propia de una Comunidad Autónoma se derivan consecuencias en lo que respecta a su enseñanza, como hemos reiterado en anteriores decisiones (SSTC 87/1983, fundamento jurídi-

co 5; 88/1983, fundamento jurídico 4 y 123/1988, fundamento jurídico 6)». En el otro extremo, y habiendo admitido la legitimidad constitucional de los propósitos de las legislaciones autonómicas de normalización lingüística, hemos señalado que «ha de admitirse el riesgo de que las disposiciones que adopten las Comunidades Autónomas pueden afectar al uso de la otra lengua cooficial y, de este modo, a la ordenación del pluralismo lingüístico que la Constitución y los respectivos Estatutos de Autonomía establecen» (STC 337/1994, FJ 8), habiendo afirmado muy tempranamente que corresponde al Estado velar por el respeto de los derechos lingüísticos en el sistema educativo y, en particular, «el de recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado» (STC 6/1982, de 22 de febrero, FJ 10), «pues no cabe olvidar que el deber constitucional de conocer el castellano (art. 3.1 C.E.) presupone la satisfacción del derecho de los ciudadanos a conocerlo a través de las enseñanzas recibidas en los estudios básicos» (STC 337/1994, FJ 10).»

*D. El artículo 11 de La Ley 12/2009, de Educación de Catalunya, deberá interpretarse y aplicarse de acuerdo con el criterio constitucional aplicado al Estatut de Autonomía, FJ 24 de la STC 31/2010 (por criterio del Tribunal Supremo y en base al principio de jerarquía normativa):*

«El catalán, lengua vehicular y de aprendizaje.

1. El catalán, como lengua propia de Cataluña, es la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo.»

*E. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, establece:*

«Disposición adicional trigésima octava. Lengua castellana, lenguas cooficiales y lenguas que gocen de protección legal.

1. Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y alumnas a recibir las enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus Estatutos y normativa aplicable [...].

[...]

3. Las Administraciones educativas adoptarán las medidas oportunas a fin de que la utilización en la enseñanza de la lengua castellana o de las lenguas cooficiales no sea fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación.

4. En las Comunidades Autónomas que posean, junto al castellano, otra lengua oficial de acuerdo con sus Estatutos, o, en el caso de la Comunidad Foral de Navarra, con lo establecido en la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento

del Régimen Foral de Navarra, las Administraciones educativas deberán garantizar el derecho de los alumnos y alumnas a recibir las enseñanzas en ambas lenguas oficiales, programando su oferta educativa [...] la adopción por la Administración educativa competente de medidas adecuadas para garantizar los derechos lingüísticos individuales de los alumnos y alumnas. A estos efectos, no se considerarán adecuadas las medidas que supongan la atención individualizada en castellano o la separación en grupos por razón de la lengua habitual.»

*F. La jurisprudencia del Tribunal Supremo, citando como ejemplos:*

– El fallo del recurso de casación 1839/2009 de 16 de diciembre de 2010:

«[...] declaramos el derecho de la recurrente a que el castellano se utilice también como lengua vehicular en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Cataluña, y en consecuencia y para ello la Generalidad deberá adoptar cuantas medidas sean necesarias para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la declaración de la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán, incluyendo el derecho de los niños en educación infantil a recibir la enseñanza en la lengua peticionada por los padres y de igual modo declaramos que el modelo oficial de preinscripción en educación infantil ha de preguntar por la lengua habitual a los padres o tutores de los niños preinscritos en los cursos escolares en centros sostenidos con fondos públicos [...].»

– El FJ 4 de la sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 19/11/2013 (recurso de casación 3077/2012):

«[...] desde la perspectiva constitucional se ha de desarrollar un modelo de conjunción lingüística [...] y a salvo la excepción de la educación infantil, con derecho a recibirla en su lengua habitual, derecho plasmado en el artículo 21.2 de la Ley 1/1998.

[...] y de igual modo declaramos que el modelo oficial de preinscripción... ha de preguntar por la lengua habitual a los padres o tutores de los niños preinscritos en los cursos escolares en centros sostenidos con fondos públicos.»

Por todo lo expuesto,

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat, con el objetivo de garantizar la legalidad en el proceso de preinscripción escolar para el curso 2015-16, a:

1. Introducir en el impreso oficial de preinscripción la casilla, o la opción que se considere oportuna, en la que se pueda expresar la lengua habitual oficial del niño, así como la opción lingüística de sus padres o tutores, de entre la oferta que estime adecuada la Au-

toridad Educativa, y que debe incluir necesariamente oferta de enseñanza con el castellano también como lengua efectivamente vehicular.

2. Eliminar la atención individualizada como medio de hacer efectivo el derecho de los niños a recibir parte de su enseñanza en castellano, método explícitamente excluido en la normativa básica educativa.

Palacio del Parlamento, 4 de febrero de 2015

Josep Enric Millo i Rocher    María José García Cuevas  
Portavoz del GP del PPC    Diputada del GP del PPC

— **Moció subsegüent a la interpellació al Govern sobre la política econòmica**

Tram. 302-00248/10

**Presentació**

Grup Parlamentari Socialista  
Reg. 104327 / Admissió a tràmit: Mesa  
del Parlament, 10.02.2015

**A LA MESA DEL PARLAMENT**

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el que estableix l'article 139 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la interpellació al Govern sobre la política econòmica (tram. 300-00262/10).

**Moció**

1. El Parlament reprova el Conseller d'Economia i Co-neixement per l'engany que suposa la presentació de dos pressupostos de la Generalitat de Catalunya diferents per a l'exercici del 2015. Un es va presentar al Parlament de Catalunya el 2 de desembre de 2014, i l'altre és el presentat al Ministeri d'Hisenda en el marc del Pla Econòmic Financer.

2. El Parlament insta el Govern a clarificar quin dels dos pressupostos presentats, per una banda al Parlament de Catalunya, i per l'altra al Ministeri d'Hisenda és el que realment estableix la previsió dels ingressos dels que ens dotarem per fer front a les despeses que preveu el pressupost que, previsiblement, s'aprovarà per a l'exercici del 2015.

3. Degut a la previsió d'estalvi en interessos del quitament del deute amb el Govern d'Espanya de les Comunitats Autònomes, i que a Catalunya representa un total de 520 M€ (300 M€ dels quals permeten augmentar crèdit per despesa) tal i com ha anunciat en diverses ocasions el Conseller Mas-Colell, el Parlament insta el Govern a dedicar aquests recursos als següents programes:

- a) Pla de xoc contra la desigualtat i exclusió social:
- Inclusió social i lluita contra la pobresa: 22.500.000 €
  - Pobresa energètica: 20.000.000 €
  - Transport escolar/beques menjador/serveis educatius: 21.500.000 €
  - Escoles bressol: 17.000.000 €
  - Renda Mínima d'Inserció: 27.000.000 €
  - Llistes d'espera salut/increment activitat: 42.000.000 €
  - Ocupació aturats llarga durada: 100.000.000 €

b) Suport a l'activitat econòmica:

- Suport a la indústria (Pacte + Indústria): 35.000.000 €
- Polítiques d'innovació: 15.000.000 €

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2015

Maurici Lucena i Betriu    Alícia Romero Llano  
Portaveu del GP SOC    Diputada del GP SOC

— **Moció subsegüent a la interpellació al Govern sobre polítiques d'ocupació**

Tram. 302-00249/10

**Presentació**

Grup Parlamentari Socialista  
Reg. 104345 / Admissió a tràmit: Mesa  
del Parlament, 10.02.2015

**A LA MESA DEL PARLAMENT**

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Montserrat Capdevila Tatché, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el que estableix l'article 139 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la interpellació al Govern sobre polítiques d'ocupació (tram. 300-00263/10).

**MOCIÓ**

*1. Polítiques d'ocupació i servei d'ocupació de Catalunya (SOC)*

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a:

1. Complementar amb 100 milions d'euros les parts del programa d'ocupabilitat dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 amb els recursos resultants de la reducció dels interessos del deute proposada pel Ministeri d'Hisenda per fer programes d'ocupació adreçats a les persones aturades de llarga durada.

2. Recuperar la dotació de llocs de treball del Servei d'Ocupació de Catalunya per poder oferir els serveis bàsics d'orientació i formació per a l'acreditació de 150.000 persones cada any i per a l'increment progressiu de la ràtio d'orientadors per arribar a un per a cada 300 aturats, tot tendint a assolir la mitjana de despesa dels estats de la UE per a polítiques actives del mercat de treball, que és del 0,5% del PIB.

## II. Pla de rescat per a persones aturades de llarga durada

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a:

3. Fer una convocatòria extraordinària del projecte «Treball als barris» per al disseny de projectes integrals als barris i/o municipis amb majors necessitats de reequilibri territorial i social, amb percentatges d'atur superior al 25% i amb baix nivell de renda. La convocatòria ha d'incloure mesures per a la contractació, per part dels ajuntaments, de persones amb especials dificultats d'inserció (joves, desocupats de llarga durada, persones de quaranta-cinc anys o més i persones en risc d'exclusió social) així com dispositius de suport a la formació i la inserció laboral, i programes de desenvolupament local i accions innovadores.

4. Presentar davant la UE, d'acord amb el reglament del Fons Europeu d'Adaptació a la Globalització, una proposta per a la reconversió dels treballadors provinents d'empreses del sector de la construcció cap a noves oportunitats ocupacionals.

5. Desplegar un pla nacional d'acreditació i qualificació professional dotat amb els recursos suficients perquè les més de 400.000 persones amb mancances de qualificació professional puguin accedir de manera continuada i permanent a un itinerari personalitzat de formació per acreditar la seva experiència professional i/o qualificar-se per poder obtenir un lloc de treball.

6. Dotar amb el pressupost suficient els programes de formació i inserció i adaptar-los a criteris objectius a partir del nombre de joves amb necessitats de formació i inserció en un determinat territori perquè no es produeixi discriminació ni limitació de drets en l'accés al programa.

7. Incloure en la programació del Servei d'Ocupació de Catalunya programes de formació amb pràctiques o experiència laboral en sectors emergents, adreçats a joves i a persones desocupades de llarga durada en activitats sostenibles (serveis ambientals, energies renovables, turisme, rehabilitació i edificació sostenible, atenció sociosanitària, etc.), així com una oferta anual de formació en llengües per a persones aturades que es puguin ocupar en el sector de l'hostaleria i la restauració.

## III. Dret al treball de les persones amb discapacitat

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a:

8. Garantir el dret al treball de les persones amb discapacitat i:

a) Assegurar la dotació econòmica suficient (58 M€) per garantir la subvenció i els pagaments amb el termini suficient que facin possible el manteniment dels llocs de treball dels Centres Especials de Treball (CET) i de les Unitats de Suport a l'Activitat Professional (USAPS), així com garantir el finançament

(11 M€) dels Serveis d'Integració Laboral, dels itineraris d'inserció i del treball amb suport.

b) Mantenir i potenciar en els processos de contractació pública que es duguin a terme, tant en els diferents departaments de la Generalitat com en les empreses i els organismes públics, la incorporació, com objecte del contracte, de les clàusules socials per promoure l'ocupació de persones amb dificultats d'inserció al mercat ordinari, mitjançant contractes directes i/o mitjançant subcontractació a Empreses d'Inserció o Centres Especials de Treball.

c) Definir de forma participada i consensuada amb totes les organitzacions del sector, un Pla estratègic pels CET que, a partir de la singularitat i especificitat d'aquestes empreses de l'economia social a Catalunya, inclogui mesures per a la seva sostenibilitat, reestructuració i revitalització amb l'objectiu de garantir-ne la viabilitat financera i la competitivitat econòmica mitjançant l'impuls de línies de negoci viables, formació i inversió.

## IV. Incompliments del Govern

9. El Parlament de Catalunya constata que el Govern ha incomplert majoritàriament el mandat parlamentari adoptat a les mocions 8/X, 12/X, 17/X, 22/X i les resolucions 301/X i 323/X del Parlament de Catalunya.

10. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a acomplir dites mocions i resolucions en tots els seus apartats i presentar a les Comissions de Joventut i d'Empresa i Ocupació el Pla de Garantia Juvenil de Catalunya, amb el seu pressupost, els objectius i els indicadors previstos, així com l'avaluació d'acompliment.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2015

Maurici Lucena i Betriu    Montserrat Capdevila Tatché  
Portaveu del GP SOC                      Diputada del GP SOC

## — Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les actuacions per a garantir l'accés als subministraments bàsics

Tram. 302-00250/10

### Presentació

Grup Parlamentari d'Esquerra

Republicana de Catalunya

Reg. 104609 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.02.2015

## A LA MESA DEL PARLAMENT

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, d'acord amb el que estableix l'article 139 del Reglament del Parlament, presenten la següent

moció, subsegüent a la Interpellació al Govern sobre les actuacions per a garantir l'accés als subministraments bàsics (tram. 300-00266/10).

#### EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La dificultat per accedir als serveis bàsics no és, òbviament, nova. Al llarg de la història, els sectors populars han patit tota mena de privacions i manca de protecció tan per a l'ús de l'aigua com de les diferents formes d'energia. En els darrers anys, però, la problemàtica s'ha agreujat de forma notable. El primer factor que explica aquest empitjorament és l'increment desorbitat en el rebut de la llum i el gas i el pes creixent d'aquests en les economies familiars. En els darrers sis anys, el preu de l'electricitat ha pujat significativament a Europa (entre el 20% i el 30%), però a l'Estat Espanyol aquest s'ha situat entre el 50% i el 60%. Actualment, Espanya es situa com el tercer país de la Unió Europea en allò que fa referència al preu de l'electricitat per kilowatt, només superat per Xipre i Irlanda.

Aquest fet, afegit a l'increment en la taxa d'atur i el percentatge de famílies que no tenen cap ingrés, han augmentat substancialment el pes de les despeses de l'energia i l'aigua en les economies familiars. En definitiva, mentre les condicions de vida de la població han empitjorat de forma notable, també ho ha fet el preu de l'energia. I, val a dir, també ho han fet els beneficis de les empreses elèctriques.

#### *La precarietat de la informació*

Algunes de les mesures que es proposen en aquesta moció es centren en el traspàs o la millora de la informació. La major part dels estudis (des del que va elaborar, el 2012, la Taula del Tercer Social fins el que va presentar, l'any següent, el Síndic de Greuges) coincideixen a remarcar la manca de dades que ens permetin avaluar, de forma precisa, la magnitud i l'evolució de la problemàtica al nostre país. Les companyies subministradores no proporcionen dades sobre impagats; i, altrament, resulta extraordinàriament complicat destriar quins d'aquests corresponen a consumidors vulnerables, que tenen dificultats o es veuen impossibilitats per fer front al rebut de la llum, el gas o l'aigua.

Bona part dels estudis es refereixen, en aquests moments, a enquestes. Una d'aquestes és l'Enquesta sobre condicions de vida, la darrera de les quals correspon al 2011. A banda de l'antiguitat de les dades, es tracta d'una font molt precària, donat que només inclou una pregunta sobre la matèria, relacionada amb les dificultats per a «mantenir la llar adequadament calenta». També disposem de les dades incloses en el cinquè estudi de l'Observatori per la Vulnerabilitat de la Creu Roja, que parteix d'una enquesta sobre una mostra de 16.059 usuaris i usuàries de l'entitat. Cal, doncs, establir mecanismes per tal de garantir la disponibilitat d'informació de primera mà, tan a nivell de persones

afectades com de la capacitat de les polítiques públiques per ajudar-los.

El problema no rau només en la manca de dades, sinó en la dificultat per a generar un traspàs efectiu d'informació entre les companyies subministradores i els serveis socials bàsics. En aquest sentit, els Taules Territorials poden esdevenir un instrument molt útil per afavorir el traspàs d'informació i, al mateix temps, coordinar les actuacions en cadascun dels territoris del país.

#### *El retard de les polítiques públiques*

Tot i que existien alguns recursos en allò que fa referència a les tarifes socials, el debat al voltant de la pobresa energètica ha arribat amb un notable retard al nostre país. De fet, l'Informe sobre la Pobresa Energètica (2012) del Síndic de Greuges que s'ha citat més amunt, reconeix obertament «l'absència d'una política pública» en aquesta matèria i cita expressament la Moció 10/X, del 25 d'abril de 2013, sobre les polítiques d'inclusió social i d'eradicació de la pobresa, presentada pel grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. En el punt a). d'aquesta, aprovat per unanimitat, s'instava el Govern a «promoure, de manera immediata, les mesures necessàries –incloses les normatives, si cal– per tal que les empreses subministradores d'energia i aigua potable no interrompin el subministrament per impagament si no tenen un informe dels serveis socials bàsics i si la unitat familiar rep uns ingressos inferiors al salari mínim interprofessional o es troba en una situació econòmica d'estat de necessitat». En la mateixa moció també es reclamava, a través de l'apartat b., que es reclamés al govern de l'Estat «la transferència de la fixació dels preus bàsics de l'energia per a establir un sistema públic de preu social en els subministraments bàsics per a la llar d'electricitat, gas natural i gas butà, amb la fixació d'uns consums mínims vitals en còmput mensual, atenent al nombre de components de la llar i de les estacions de l'any, de manera que es fixin consums mínims diferents en funció de les condicions climàtiques, corresponents com a mínim a dos períodes anuals: d'abril a setembre i d'octubre a març». En aquesta primera moció, doncs, el Parlament de Catalunya, instava el govern a intervenir en aquesta qüestió (volem recordar-ho) «de manera immediata» i li donava algunes primeres pautes d'actuació, com ara la protecció dels consumidors vulnerables i la impossibilitat de privar-los d'un dret bàsic sense disposar d'un informe dels serveis socials.

Tot i que l'encomana del Parlament permetia un treball reposat i rigorós per arribar al període hivernal amb els deures fets, el Govern de la Generalitat va reaccionar amb retard. I, com veurem més endavant, val a dir que de forma molt tímida. Les dades indiquen que han estat menys d'un miler les persones beneficiàries del decret; una xifra que, molt probablement, cal atribuir a la manca d'informació de la mesura i a les dificultats per acollir-s'hi.

El 13 de març de l'any passat, en el debat monogràfic de pobresa, el grup parlamentari d'ERC va tornar a impulsar una nova iniciativa sobre la matèria. En aquest cas, es va aprovar un punt (el 24. I) en el que s'instava el Govern a «presentar, en el termini de tres mesos i en la línia del treball iniciat per la Generalitat per lluitar contra la pobresa energètica, un informe d'avaluació del Decret llei 6/2013, del 23 de desembre, pel qual es modifica la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum, i, a partir d'aquest informe, presentar, abans del 30 de setembre d'enguany, un nou decret de modificació que amplii el període d'aplicabilitat a tot l'any, simplifiqui substancialment els tràmits i incorpori els instruments de suport econòmic per a les persones que no arribin a l'1,5 de la renda de suficiència de Catalunya i no puguin afrontar el deute». La proposta, aprovada amb el suport dels grups parlamentaris de CiU, ERC i Ciutadans, instava el Govern a avaluar el decret vigent i, a partir d'aquesta avaluació, a impulsar un nou instrument, molt més ambiciós, que ampliés el període de cobertura, simplifiqués els tràmits i preveïés ajudes als consumidors que no poguessin fer front al deute. Novament, però, el Govern va incomplir els terminis i vam prendre una nova oportunitat d'afrontar el període hivernal amb instruments potents d'actuació.

Per tal d'accelerar el tema, el nostre grup parlamentari va presentar una proposició de llei en la qual es definia el nostre model. Finalment, el 18 de desembre passat, el ple del Parlament va aprovar una modificació de la Llei del codi de consum que, a banda d'afrontar la problemàtica del deute hipotecari, introduïa tot un seguit de mesures al voltant de la pobresa energètica, en bona part recollint les propostes de la proposició de llei. La darrera setmana, a més a més, s'han anunciat els acords entre ERC i CiU sobre el projecte de llei de pressupostos. A través d'aquestes, es crea un fons del 10 milions d'euros per a ajudes destinades a llars que no poden fer front a la despesa energètica; una quantitat que hauria d'incrementar-se substancialment amb les aportacions de les companyies subministradores.

El problema no és només el retard en les polítiques públiques, sinó la ineficiència d'alguna d'aquestes. Un exemple d'això és el cànon social de l'Agència Catalana de l'Aigua, que té una repercussió social extraordinàriament limitada. Si ens cenyim a les dades proporcionades pel l'Associació d'Abastaments d'Aigua, el percentatge dels abonats que s'acullen a aquest cànon entre les empreses associades no supera el 0,04% del total, una xifra insignificant. Cal, doncs, replantejar a fons aquest instrument per tal de fer efectiu el dret d'accés a l'aigua i definir un sistema més just i sostenible, en el que els usuaris tinguin garantit un subministrament mínim.

Finalment, la moció pretén incidir en el dibuix d'un sistema de subministraments bàsics en l'escenari

d'una Catalunya independent, principalment a partir de l'accés a aquests com una peça clau en el benestar de la gent, un sistema transparent i just en la fixació dels preus i la prohibició de pràctiques esteses a l'Estat Espanyol com ara les anomenades portes giratòries.

#### MOCIÓ

Per tot això, el grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) planteja l'adopció dels següents acords:

1. En allò que fa referència a l'aplicació de la modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya per tal de millorar la protecció de les persones consumidores i, més específicament, en l'àmbit de la pobresa energètica, el Parlament insta el Govern de la Generalitat a:

1.1. Concretar, abans d'un mes, la informació que estan obligades a proporcionar les empreses subministradores en qualsevol avís o comunicació relativa a la manca de pagament del servei, en compliment d'allò que s'estableix en el punt 6 de l'article 252-4 de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya.

1.2. Concertar, amb les empreses subministradores de llum, gas i aigua, una campanya informativa, adreçada específicament a tots i cadascun dels/de les consumidors/es de Catalunya, sobre «les tarifes socials i/o els altres ajuts i mesures previstos per fer front a la pobresa energètica», en compliment d'allò que s'estableix en el punt 10 de l'article 252-4 de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya.

1.3. Habilitar, de forma permanent, un espai en el portal web de la Generalitat de Catalunya per tal d'informar de tots els recursos a disposició de consumidor vulnerable, tan a nivell d'eficiència energètica o d'estalvi d'aigua com de les ajudes per fer front a les despeses. I impulsar, amb les empreses subministradores, acords per tal que incorporin, en els seus plans de responsabilitat social i els seus portals web, un apartat específic per tal d'informar sobre els recursos i mesures que ofereixen per combatre la pobresa energètica i la dificultat d'accés a l'aigua.

1.4. Impulsar, abans de tres mesos, un pla de formació específic adreçat a tots i a totes els i les professionals dels serveis socials bàsics i obert a les entitats socials i el personal d'atenció al públic dels ens locals en allò que fa referència als recursos disponibles per fer front a la pobresa energètica i l'accés a l'aigua.

1.5. Impulsar un protocol preventiu, de caràcter bidireccional, entre els serveis socials bàsics i les empreses subministradores, per tal de detectar els usuaris o usuàries en risc de patir interrupcions o talls en els subministraments a causa d'impagaments associats a possibles situacions de vulnerabilitat, en compliment

d'allò que estableix el punt 10 de l'article 252-4 de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya.

2. En allò que fa referència a l'impuls de noves mesures, el Parlament insta el Govern de la Generalitat a:

2.1. Establir un mecanisme estable de traspàs de la informació dels usuaris i usuàries afectats per qualsevol tall en el subministrament de llum, gas o aigua; i, al mateix temps, de l'abast de les ajudes proporcionades des de les empreses subministradores, les entitats socials, les administracions públiques en aquesta matèria. I, de forma automàtica, publicar aquestes dades, amb desagregació municipal i sèries mensuals, a través del portal de la transparència.

2.2. Introduir, en les enquestes que elabora regularment l'IDESCAT sobre condicions de vida i hàbits de la població, un apartat específic i detallat sobre l'accés als serveis bàsics, en el que no només es reculli la capacitat per assumir «la despesa de mantenir l'habitatge a una temperatura adequada», tal i com es fa actualment, sinó que inclogui l'accés a l'aigua o a l'energia.

2.3. Promoure la creació de taules territorials d'accés als serveis bàsics, amb presència d'entitats socials, ens locals, treballadors socials i empreses subministradores, per tal de coordinar les actuacions en aquesta matèria.

2.4. Desplegar reglamentàriament, abans de trenta dies, el Fons d'Ajuda per Afectats de la Pobresa Energètica destinat a les persones que no poden fer front al pagament dels rebuts de llum, gas o aigua. A través d'aquest reglament s'establiran els procediments per accedir a les ajudes i es concretarà la provisió del fons, el qual s'haurà de dotar, preferentment, a partir de les aportacions de les empreses subministradores.

2.5. Acordar, amb les empreses subministradores, un programa que incorpori assessorament gratuït i subvencions o intervencions directes per tal de millorar l'eficiència energètica o l'estalvi d'aigua en els habitatges, amb un especial incís en les famílies més vulnerables.

2.6. Introduir un mecanisme específic d'ajudes per als usuaris o usuàries que no poden fer front a la despesa del gas embotellat.

3. En allò que fa referència al dret dels ciutadans i ciutadanes per accedir a l'aigua:

3.1. Elaborar, en el termini màxim de sis mesos, un informe que reculli totes les experiències que impulsen les administracions locals o les entitats socials en allò que fa referència al combat contra la pobresa energètica i l'accés a l'aigua.

3.2. Impulsar els canvis legislatius necessaris per tal de garantir un subministrament bàsic d'aigua a tots els habitatges, a determinar en relació al nombre d'habi-

tants del mateix, inferior o igual als 60 litres/persona/dia a un cost de 0 euros/m<sup>3</sup>. El cànon social que l'Agència Catalana de l'Aigua aplica als consums inferiors o iguals als 18m<sup>3</sup>/habitatge passarà a ser igual a 0 euros/m<sup>3</sup> per aquesta mateixa quantitat d'aigua consumida i per aquells consumidors que es considerin vulnerables segons la definició establerta.

3.3. Crear un servei de suport i assessorament als ajuntaments que vulguin recuperar la gestió pública del servei de subministrament d'aigua, a fi de millorar-ne la gestió i vèncer les dificultats tècniques i polítiques d'un procés de re municipalització.

4. En allò que fa referència a la definició d'un marc del treball per a un Estat propi, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:

4.1. Elaborar, en el termini màxim de sis mesos, un informe sobre el dret d'accés als subministraments bàsics en l'escenari d'una Catalunya independent que parteixi de la concreció d'unes tarifes socials i d'un sistema transparent i just per a regular els preus públics.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2015

Marta Rovira i Vergés  
Portaveu del GP d'ERC

Pere Bosch Cuenca  
Diputat del GP d'ERC

#### — Moció subsegüent a la interpellació al Govern sobre la llei electoral

Tram. 302-00251/10

##### Presentació

Grup Parlamentari de Ciutadans  
Reg. 104878 / Admissió a tràmit: Mesa  
del Parlament, 10.02.2015

#### A LA MESA DEL PARLAMENT

Albert Rivera Díaz, president, Carlos Carrizosa Torres, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d'acord amb el que estableix l'article 139 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpellació al Govern sobre la llei electoral (tram. 300-00264/10).

#### Moció

El Parlamento de Cataluña declara la necesidad de aprobar una ley electoral catalana completa antes de que finalice el actual período de sesiones. Dicha ley debería atender como mínimo a los siguientes principios

1. Un sistema de listas desbloqueadas y/o abiertas en el que los ciudadanos elijan y ordenen a los candidatos presentados por los distintos partidos.

2. La proporcionalidad democrática, corrigiendo los desequilibrios existentes en el sentido de garantizar que todos los votos de los ciudadanos tengan el mismo valor, independientemente de su lugar de residencia.

3. Mecanismos para fomentar la democracia y la transparencia internas de los partidos políticos, entre los cuales

– Elecciones primarias internas en los partidos políticos.

– La exclusión de las listas electorales de las personas imputadas por corrupción política.

4. La reducción del actual límite de gasto electoral de los partidos políticos, y medidas de reducción de los gastos de campaña tales como el envío único de toda la correspondencia electoral.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2015

Albert Rivera Díaz  
President del GP de C's

Carlos Carrizosa Torres  
Diputat del GP de C's

#### 4. INFORMACIÓ

##### 4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT I COMUNICACIONS DEL GOVERN I D'ALTRES ÒRGANS

##### 4.70.01. COMPOSICIÓ DEL GOVERN, DELEGACIONS DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE DESPATX

##### — Encàrrec del despatx del conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a la vicepresidenta del Govern

Tram. 330-00087/10

##### Presentació

President de la Generalitat

Reg. 104509 / Coneixement: 05.02.2015

A LA PRESIDENTA DEL PARLAMENT

Benvolguda Presidenta,

De conformitat amb el que estableix l'article 12.1.k de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte que durant l'absència del conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, el dia 5 de febrer de 2015, s'encarregarà del despatx del seu Departament la vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals.

Cordialment,

Barcelona, 3 de febrer de 2015

Artur Mas i Gavarró  
President de la Generalitat de Catalunya

*N. de la R.: El Decret 11/2015, de 3 de febrer, d'encàrrec de despatx del conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a la vicepresidenta del Govern de la Generalitat de Catalunya i consellera de Governació i Relacions Institucionals el 5 de febrer de 2015, és publicat al DOGC 6804, del 5 de febrer de 2015.*